

Justicia para los Awá

Doce integrantes de la tribu Awá, entre los que se encuentran cuatro niños, fueron masacrados en el departamento de Nariño. La noticia no puede quedar impune porque sería un escabroso y súbito regreso a las épocas en las que la vida de los colombianos valía muy poco frente a la amenaza de quienes usan las armas para imponer sus designios o silenciar a los testigos de sus infamias.

Infortunadamente, el hecho tiene un antecedente rodeado por la impunidad. El 11 de febrero de 2009 un grupo de las Farc cometió uno de sus tantos crímenes contra la misma etnia. En su momento se dijo que tal hecho se debía a la lucha por el territorio sembrado de cultivos ilícitos, mientras los asesinos acusaban a sus víctimas de colaborar con la Fuerza Pública. Ahora son los grupos paramilitares o los narcotraficantes quienes son sindicados de cometer el que puede calificarse como genocidio. Y no falta quien afirme que el último hecho involucra a las autoridades. Cualquiera sean las causas y los ejecutores, el Estado tiene la obligación de encontrar la verdad y contárselas a los colombianos y al mundo.

En total, más de 30 indígenas Awá han perdido la vida y cientos han debido desplazarse de sus resguardos en los últimos años. Y la causa es la misma que ha generado una catástrofe humanitaria en toda Colombia: habitar zonas caracterizadas por su riqueza natural y una destacada posición geográfica, sin protección y a merced del narcotráfico. Otras fuentes afirman que detrás de la violencia que acorrala a los indígenas están intereses económicos en apariencia legítimos y legales. En cualquier caso, el objetivo parecen ser las 210.000 hectáreas que conforman sus 26 resguardos, donde tanto los narcocultivos como los afanes por apoderarse de la riqueza mineral y agrícola pueden desatar lo que hoy se está lamentando.

La inquietud es la misma que aparecía en las épocas en que el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla azotaban a discreción el campo colombiano: ¿Dónde estaba el Estado que debe proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, sabiendo los riesgos a los que están expuestos los Awá? Y como siempre ha sucedido, al no tener respuestas ni protección, los indígenas han debido huir, desplazándose incluso hasta Cali. Es una película ya vista, donde quienes deben garantizar los derechos de las víctimas llegan después de quienes los violan para asegurar sus fechorías.

El Gobierno pidió el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar la masacre. Pero los Awá están reclamando justicia desde el momento en que la violencia irrumpió en sus territorios, como lo han hecho los miles de habitantes del litoral nariñense, acosados por la pobreza y por el ataque de la violencia en todas sus expresiones.

El crimen, cometido en el resguardo de Gran Rosario, a pocos kilómetros de Pasto, se produjo mientras en esa ciudad se celebraba el Encuentro Internacional de Culturas Andinas. Allí se rechazó la intromisión de grupos armados en las comunidades indígenas. Habrá que esperar que el Estado colombiano se comprometa a hacer realidad esa justa petición.